TL 2102

NOTA: Amnistía Internacional editó recientemente un excelente informe sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental. Por estar dentro de los hechos a los que NDH le ha dedicado amplia difusión y ha realizado importantes gestiones que nuestros asociados conocen, vertimos este material como inserto en nuestro habitual boletín, por entender que será de utilidad para la comprensión del problema.

amnistía internacional

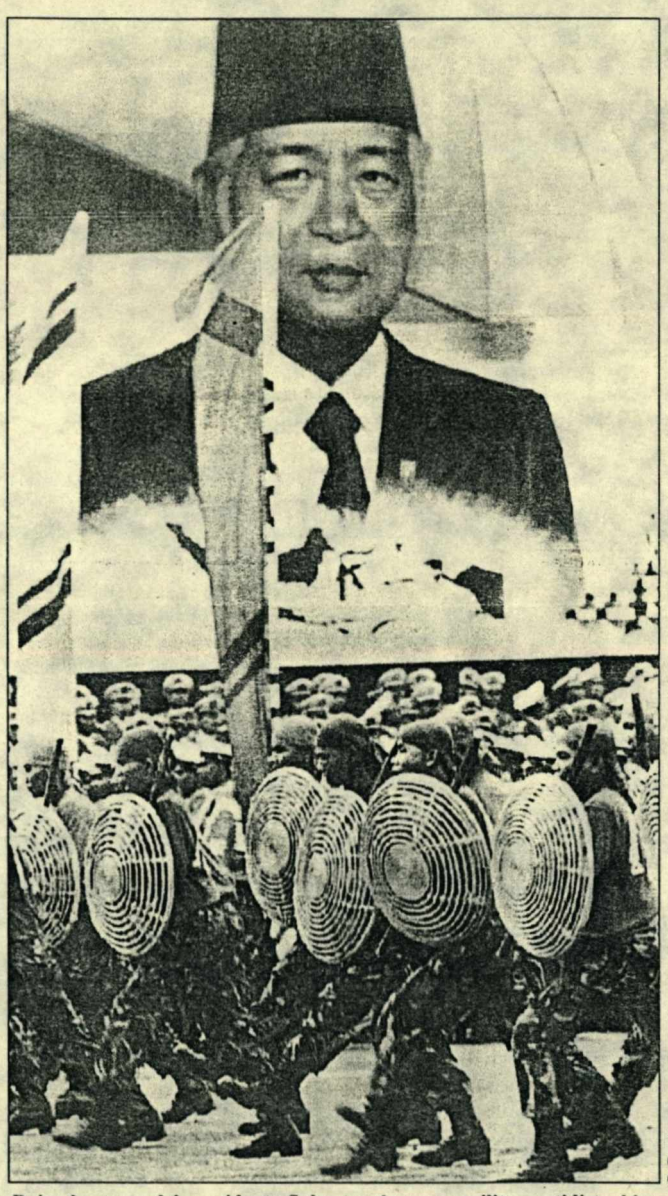
La otra cara de Indonesia

El desdén por los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental

La imagen que Indonesia presenta al mundo ha sido cuidadosamente elaborada con el objeto de llenar sus hoteles de turistas y atraer las inversiones extranjeras. Pero detrás de la agradable fachada hay otra Indonesia que llena sus cárceles de ciudadanos por expresar pacíficamente sus convicciones políticas o religiosas, una Indonesia que mata o tortura a quienes considera un obstáculo para el desarrollo económico y la estabilidad nacional.

En Indonesia se tortura a niños detenidos, se viola y abusa sexualmente de las mujeres, se fusila a septuagenarios después de encarcelarlos 20 años por motivos políticos, y se mata a las ancianas que se resisten a ser expulsadas de sus tierras. Los homicidios arbitrarios se cuentan en cientos de miles.

Estudiantes, sindicalistas, agricultores, líderes populares, periodistas y defensores de los derechos humanos han sufrido por igual bajo el Gobierno del Nuevo Orden, que subió al poder en 1965 tras un golpe de Estado militar. Desde entonces el país se ha visto afligido por una constante de abusos. Los más persistentes han acontecido en Timor Oriental —antigua colonia portuguesa que Indonesia viene ocupando ilegalmente desde 1975— y en Aceh e Irian Jaya, donde el gobierno combate los movimientos independentistas armados. Pero los abusos ocurren en toda Indonesia, incluso en aquellas regiones generalmente consideradas "armoniosas", como Java y Bali.



© Reuters

Bajo el retrato del presidente Suharto, el cuerpo militar antidisturbios desfila durante el Día de las Fuerzas Armadas, octubre de 1992. El ejército domina la arena política indonesia desde hace tres decenios.

EL RÉGIMEN

Las fuerzas armadas comparten el poder con el presidente, y concentran sus esfuerzos más en la supuesta amenaza interna que en la defensa nacional. Los militares operan un complejo sistema de vigilancia y controlan la situación política, social y económica de la nación. Las autoridades afirman que el gobierno es democrático, pero no se ven señales de libertad política. El presidente Suharto ocupa el poder desde 1968. Desde esa fecha, ha triunfado —como único candidato— en cinco elecciones sucesivas. Aparte del partido de gobierno, Golkar, sólo se permite la existencia de dos partidos políticos, sin posibilidad de acceso al poder. Todos los candidatos a las elecciones nacionales deben ser investigados por los servicios de inteligencia militar y sus candidaturas aprobadas por el presidente. El gobierno y el ejército, mancomunados, recurren arbitrariamente a métodos represivos de control social. La ley proclama la independencia del poder judicial pero, en la práctica, los tribunales se limitan a reforzar el poder del ejecutivo y de los militares. Durante los últimos tres años, el gobierno se ha enfrentado con el creciente malestar del sector laboral, provocado por los magros salarios y la prohibición de formar sindicatos independientes. En las zonas rurales, los agricultores han protestado enérgicamente cuando se les ha expulsado de sus tierras para dejar vía libre a proyectos hidroeléctricos, urbanizaciones y campos de golf. En todo el país, estudiantes y periodistas han desempeñado un papel vital en las protestas contra las violaciones de derechos humanos. Su disconformidad les ha valido la respuesta brutal de la maquinaria estatal y, con frecuencia, el encarcelamiento, la agresión física y la muerte.

En Aceh, Irian Jaya y Timor Oriental, la lucha por la independencia también ha hallado expresión en la oposición armada. El gobierno ha respondido con operaciones de contrainsurgencia masivas, ejecutadas con un abierto menosprecio por los derechos humanos. Hay que agregar que los grupos de oposición armados también han sido autores de homicidios arbitrarios, torturas y toma de rehenes. Amnistía Internacional condena dichos abusos, pero considera que las fuerzas de seguridad nunca deben usarlos como excusa para justificar sus propios excesos.

EL SILENCIO

Hasta hoy, la comunidad internacional no ha mostrado gran interés en la situación de los derechos humanos en el cuarto país más poblado del globo. Indonesia posee vastas fuentes de recursos naturales y enormes reservas de mano de obra barata. Situada en rutas clave de navegación entre el Índico y el Pacífico, Indonesia reviste considerable importancia estratégica. La aniquilación del Partido Comunista de Indonesia (PKI) en 1965 se produjo en el momento oportuno para un Occidente embarcado en la Guerra Fría, y al mundo le convino hacer la vista gorda al desprecio por los derechos humanos de que hacía gala el nuevo régimen militar.

Occidente ha puesto a disposición del Gobierno del Nuevo Orden su apoyo económico, militar y político. Los vecinos de Indonesia en el continente asiático y el Movimiento de Países No Alineados también han guardado silencio.

A las 9 de la mañana del 27 de junio, unas 300 personas, dispuestas a manifestarse pacíficamente contra las restricciones oficiales a la libertad de prensa, se congregaron frente a Sarinah Jaya, conocida tienda del centro de Yakarta. La multitud, entre la que se contaban conocidas figuras del mundo cultural indonesio, periodistas, defensores de los derechos humanos y estudiantes universitarios, inició una marcha pacífica y ordenada en dirección al Ministerio de Información para presentar sus reivindicaciones. Los manifestantes se detuvieron a unos 200 metros del Ministerio, al observar los organizadores que el edificio se hallaba rodeado por las fuerzas de seguridad. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, efectivos del ejército y la policía antidisturbios atacaron a los manifestantes con palos y porras. Los que tropezaron y cayeron, en el pánico de la huida, recibieron los golpes y puntapiés de las tropas *(fotografía de la derecha)*. Éstas también atacaron a un grupo más reducido de personas que consiguieron llegar al Ministerio, donde se proponían protestar pacíficamente leyendo poemas. A mediodía, 56 manifestantes, al parecer, habían sido detenidos o golpeados.

Las fuerzas antidisturbios apalean a un grupo de manifestantes durante una protesta en Yakarta el 27 de junio. Más de c ban pacíficamente hacia el Ministerio de Información para protestar contra la proscripción de tres semanarios en virtud de prensa.

Gobernados con puño c

La detención y la agresión física de manifestantes pacíficos es sintomática de la actitud desdeñosa del gobierno indonesio ante las libertades civiles y políticas.

En Indonesia y Timor Oriental, los estudiantes se cuentan entre los críticos más activos y abiertos. En mayo, 21 estudiantes fueron condenados a seis meses de cárcel por participar en una manifestación frente al Parlamento nacional. En esa ocasión unos 200 estudiantes habían instado al presidente Suharto a que admitiera su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales durante sus casi 30 años en el poder. Se les acusó formalmente de «insultar públicamente al jefe de Estado». Posteriormente, declararon que no apelarían contra las sentencias porque el sistema judicial del país no les merecía confianza. Pero los fiscales sí apelaron para que se les aumentaran las condenas y, a mediados de junio, el Tribunal Superior de Yakarta les impuso un incremento de entre ocho y 14 meses. El Tribunal decidió que se justificaba el aumento porque los estudiantes habían explotado el juicio para hacer "propaganda política".

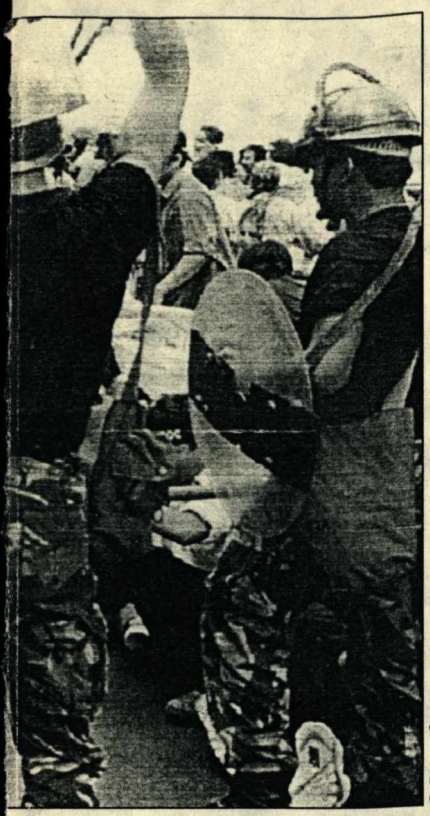
La noche del 20 de abril, Jery Manafe, estudiante de 21 años de edad, se hallaba internado en la sala de urgencias de un hospital de Kupang, en Timor Occidental. Mientras recibía asistencia médica, 10 agentes y cadetes de la policía irrumpieron en la sala y comenzaron a darle golpes. El médico encargado trató, en vano, de intervenir. Después de golpearlo, se lo llevaron en un vehículo al cuartel provincial y, unas horas después, a otro hospital, donde fue declarado sin vida a las 10:30 de la noche. Aparentemente, el motivo del asesinato de Jery Manafe fue su participación, más temprano esa misma noche, en una riña con un agente de la policía vestido de civil.

Estos incidentes demuestran lo peligroso que es cuestionar la autoridad del Estado en Indonesia. Los militares intervienen en todas las esferas de la vida nacional. En el floreciente sector industrial, los trabajadores, que reciben salarios míseros, ven gravemente restringidos derechos como el de huelga y sindicación. A principios de mayo de 1993, en Java Oriental, Marsinah, una obrera de 25 años, "desapareció" y fue torturada, violada y asesinada por sus actividades sindicales. Tanto de las circunstancias de su "desaparición" y muerte como de las actuaciones de la investigación oficial subsiguiente han surgido poderosos indicios de que su muerte fue planeada y ejecutada con el conocimiento y la complicidad de las autoridades militares. La investigación culminó en el enjuiciamiento de nueve civiles, que fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel. Un solo miembro de las fuerzas armadas fue acusado oficialmente —con un cargo disciplinario—, y recibió una pena de nueve meses de cárcel.

DISPUTAS DE TIERRAS

Las fuerzas de seguridad también han tratado brutalmente a manifestantes pacíficos en el marco de disputas de tierras. El 25 de septiembre de 1993, en la isla de Madura, las tropas abrieron fuego, con un saldo de cuatro muertos y tres heridos, contra 500 manifestantes que protestaban contra la construcción, en Nipah, de una represa que inundaría sus tierras y dejaría tres pueblos sumergidos. Los muertos fueron Mutirah, de 51 años, madre de tres hijos; Nindin bin Musa, escolar de 14 años; Samuki P. Supriadi, de 28 años, y un hombre llamado Muhammad, que murió cinco días después a consecuencia de sus heridas. Una delegación de investigación de la Fundación Indonesia para la Asistencia Jurídica no encontró pruebas de que los manifestantes hubiesen ido armados o se hubiesen comportado agresivamente. La delegación llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad habían abierto fuego sin aviso y sin mediar provocación alguna.

El gobierno recurre a la fuerza brutal para someter a su voluntad a grupos enteros. *Aceh Merdeka* (Aceh Libre) es un grupo armado que se opone a la dominación indonesia de Aceh, zona del extremo norte de Sumatra, y que declaró unilateralmente la independencia de la región el 4 de diciembre de 1976. A principios de 1990, una operación de contrainsurgencia arremetió contra el movimiento de oposición en Aceh: se sucedieron las matanzas masivas, las ejecuciones públicas, las torturas y los encarcelamientos. El caso de Djamilah Abukar ilustra los métodos empleados por los militares indonesios para perseguir a la población. En junio de 1989, los soldados llegaron al domicilio de Djamilah Abukar buscando a su esposo Jasin. Cuando les dijo que tardaría días en volver, la forzaron, a punta de fusil, a admitir que Jasin era miembro de *Aceh Merdeka* y después la obligaron a desnudarse e incendiaron su casa. Durante más de 18 meses, Djamilah Abukar huyó de un pueblo a otro, con el ejército pisándole los talones. Finalmente fue detenida en marzo



© Popperfoto

…en personas fueron detenidas cuando marcha… …de restricciones gubernamentales a la libertad

…le hierro

de 1991, poco después de una visita de su esposo, y más tarde la encontraron muerta a la vera de un camino.

Nadie ha sido enjuiciado por este delito. La policía y el ejército indonesios cometen violaciones de derechos humanos con impunidad, sabiendo que rara vez se investigan sus acciones. La iniciación de investigaciones se deja a discreción de los oficiales de las fuerzas armadas. Cuando sí se realizan, se las encomienda casi sin excepción a las fuerzas de seguridad y, a menudo, a miembros de la misma unidad a la que se atribuyen los delitos en cuestión. En los últimos cinco años, los únicos miembros del ejército condenados por violaciones de derechos humanos han sido dos soldados encarcelados ocho meses por su participación en la matanza de Santa Cruz, en Timor Oriental *(véase página siguiente)*.

No son sólo los críticos y opositores políticos los que sufren. La represión extiende su garra a todos los sectores de la sociedad y es frecuente que se la inflija arbitrariamente. En enero de 1993, la policía de Indramayu, en Java Occidental, torturó hasta la muerte a un obrero de la construcción, torturó también a su esposa, a la que hubo que hospitalizar, y obligó a su hijo de nueve años a presenciar las torturas y hasta participar en ellas. La policía había detenido al niño, Junyonto, por sospechar que había robado una cartera. Tras recibir golpes en los pies y quemaduras con cigarrillos, el niño confesó que había robado la cartera y se la había entregado a sus padres. Éstos fueron detenidos. A la madre, Dasmen, le dieron golpes y puntapiés, le ataron las piernas, la suspendieron boca abajo del techo y, mientras la interrogaban, le tiraron del pelo. Entonces hicieron entrar al niño y lo obligaron a golpear a su madre. Dasmen perdió el conocimiento y la llevaron a un hospital, donde permaneció tres días en estado de coma. Al día siguiente torturaron a su esposo, Sudarmono, y otra vez obligaron a Junyonto a presenciar la escena. Sudarmono perdió el conocimiento, y fue declarado sin vida a su llegada al hospital.

EJECUCIONES

Todos los años mueren decenas de personas bajo custodia después de haber sido maltratadas o torturadas. También se realizan ejecuciones sumarias: entre 1983 y 1985, los pelotones de fusilamiento despacharon a 5.000 presuntos delincuentes. En 1989, el presidente Suharto manifestó en su autobiografía que estas ejecuciones constituían una política deliberada del gobierno: una "terapia de choque" para poner freno a la delincuencia. La pena de muerte se aplica principalmente a los opositores políticos: de las 30 personas ejecutadas desde 1985, 27 eran presos políticos. La mayoría fueron condenados tras juicios sin garantías. Algunos llevaban más de 20 años a la espera de ser ejecutados.

Durante el golpe militar de 1965, más de un millón de personas fueron detenidas por sus presuntos vínculos con el Partido Comunista de Indonesia (PKI). Treinta miembros del PKI detenidos ese año continúan aún en la cárcel, seis de ellos en la antesala de la muerte. Uno de los 30 es Pudjo Prasetio, ex constructor de buques y sindicalista que se había afiliado al PKI a mediados de la década de los 50. En 1967 lo detuvieron, y pasaron 12 años antes de que lo enjuiciaran y condenaran a cadena perpetua por subversión. Su salud se ha quebrantado, y en 1993 los médicos diagnosticaron que padecía el mal de Parkinson. En mayo de 1991 las autoridades rechazaron su petición de clemencia. Pudjo Prasetio le escribió a un amigo: «No queda otra forma de conseguir la libertad. De no producirse cambios políticos, quedaré encerrado para siempre».

Occidente se desentiende

En una declaración sobre Timor Oriental presentada el 13 de julio de 1994 al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Descolonización, AI manifestó: «Cada año, desde hace ya un decenio, Amnistía Internacional ha acudido ante este Comité para manifestar su preocupación por la situación de los derechos humanos en Timor Oriental. Cada año, nuestras críticas han ido dirigidas principalmente al gobierno de Indonesia, a cuyas políticas y acciones se deben las persistentes violaciones de derechos humanos que se cometen en el territorio desde hace casi 20 años. Este año nos vemos obligados a romper la tradición: hoy dirigimos nuestras acusaciones no sólo al gobierno indonesio, sino a los Estados miembros de la ONU quienes, a nuestro modo de ver, comparten la responsabilidad —tanto directa como indirecta—, de la lamentable situación en que se encuentran los derechos humanos en Timor Oriental.»

La culpabilidad general de la comunidad internacional en la desastrosa situación de los derechos humanos no sólo tiene que ver con Timor Oriental sino con toda Indonesia. Durante los últimos 30 años, al Occidente le ha resultado conveniente cerrar los ojos ante la penosa situación del pueblo indonesio. En los momentos más críticos de la Guerra Fría, el Occidente adoptó al Gobierno del Nuevo Orden como amigo y aliado. Muchos gobiernos, tras la retórica de respeto por los derechos humanos, han continuado suministrando a los militares indonesios las herramientas de la represión. Algunos han proporcionado entrenamiento militar a tropas indonesias cuya participación en graves violaciones de derechos humanos es por demás conocida. A mediados de 1993, las fuerzas armadas australianas realizaron cursos de entrenamiento y ejercicios conjuntos con *Kopassus*, la unidad de contrainsurgencia indonesia, autora de graves abusos durante muchos años. En octubre del mismo año, la Comisión Europea rechazó una propuesta para prohibir la venta de armas a Indonesia.

Algunos gobiernos han condicionado la ayuda económica a la actuación del país en materia de derechos humanos, pero la mayoría de los donantes de ayuda, por el contrario, han incrementado sus prestaciones a Indonesia. La situación de los derechos humanos no ha tenido mayor repercusión en las actividades comerciales indonesias.

Pese al flagrante desdén por los derechos humanos de sus ciudadanos, es evidente que al gobierno indonesio le importa lo que piensa el resto del mundo. Pero, en lugar de modificar su conducta, se ha embarcado en una frenética campaña para desacreditar el concepto mismo de los derechos humanos. El Gobierno del Nuevo Orden ha cuestionado la universalidad de los derechos humanos. Ha afirmado que se debe permitir que cada Estado sea el juez a la hora de decidir quiénes pueden gozar de los derechos fundamentales, en base a factores culturales, históricos y políticos. Ha sostenido que los principios proclamados en los pactos internacionales de derechos humanos reflejan los "valores liberales" de Occidente y no tienen por qué aplicarse necesariamente a un país en vías de desarrollo. De esta manera, el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos de Indonesia y Timor Oriental queda a discreción de sus gobernantes —los mismos que arrastran un historial ininterrumpido de violaciones de esos derechos contra sus propios ciudadanos y los de Timor Oriental.

En 1991, Indonesia se convirtió en miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Salvo escasas e insignificantes excepciones, no ha llevado a la práctica las recomendaciones de la Comisión, y ha indicado que no se siente obligada a observar las disposiciones contenidas en ciertas resoluciones.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura visitó Indonesia y Timor Oriental a finales de 1991 y manifestó en su informe que la tortura es práctica corriente. El Relator Especial formuló 11 recomendaciones concretas para prevenirla, pero a mediados de 1994 sólo una de ellas —la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos— había sido puesta en obra. El mandato de esta Comisión es limitado, y se abrigan serias dudas sobre su imparcialidad y efectividad. Aunque la integran varios abogados y juristas dignos de respeto, los más destacados defensores de los derechos humanos en Indonesia se han negado a tomar parte en ella porque no confían en que se le permita funcionar de forma libre e independiente.

La tragedia de Timor Oriental

© Steve Cox

La matanza de Santa Cruz, Timor Oriental, 12 de noviembre de 1991. Las tropas del gobierno abrieron fuego contra manifestantes pacíficos, dando muerte a más de 270 personas. Algunos de los heridos se refugiaron en esta capilla. La suerte de muchas personas, asesinadas o "desaparecidas", sigue sin conocerse.

En diciembre de 1975, las fuerzas indonesias invadieron Timor Oriental, dando comienzo a una carnicería en la que hasta 200.000 personas —un tercio de la población— fueron asesinadas o murieron de hambre o enfermedades. Desde entonces, la omnipresencia militar se ha traducido en dos décadas de terror para los timoreses. Ni la ONU ni la acosada población de Timor Oriental han reconocido la soberanía de Indonesia. En las montañas, los guerrilleros han luchado por la independencia y, en las calles de la capital, Dili, los estudiantes se han manifestado contra los invasores. Éstos han respondido a la oposición con asesinatos, "desapariciones", torturas, encarcelamientos políticos, detenciones arbitrarias, intimidación y hostigamiento.

El movimiento de resistencia clandestino prosigue la lucha pese a los enormes riesgos que ello entraña. En noviembre de 1991, la resistencia inspiró una marcha pacífica de unas 2.000 personas hacia el cementerio de Santa Cruz, en Dili. Unos cinco a 10 minutos después de que los manifestantes llegaran al cementerio, aparecieron los soldados, que se dirigieron a la entrada y formaron fila delante de las puertas. Al cundir el pánico y echarse a correr la gente, los soldados abrieron fuego. Un testigo dijo que, cuando se apagaron los disparos, vio un centenar de cadáveres en el suelo. Muchos habían recibido impactos en la espalda. La sangre continuó corriendo durante los días subsiguientes. Se estima que hasta 270 personas murieron y otras 200 "desaparecieron".

Una de las víctimas fue Domingos Segurado, profesor del colegio de lengua portuguesa de Dili y activista en la resistencia clandestina. Un periodista que lo conocía lo describió como «un hombre extremadamente apacible... que trataba de propiciar el cambio sin usar la violencia».

El general Try Sutrisno, entonces comandante de las fuerzas armadas y hoy vicepresidente de Indonesia, trató de justificar la matanza aduciendo que los participantes en la marcha habían intentado «propagar el caos». Dijo: «No hubo otra solución que dispararles. A esta gente de mala laya hay que matarla... y la mataremos».

Las pruebas que salieron a relucir en los meses siguientes a la matanza indicarían que a cierto número de heridos, que fueron internados en un hospital militar, los maltrataron o mataron deliberadamente. Un testigo ha declarado que a algunos de los que después fueron hospitalizados los habían golpeado con rocas o los habían arrollado con vehículos militares mientras yacían heridos en tierra, y que a otros les habían dado píldoras e inyecciones letales. Estas afirmaciones se verían confirmadas por la publicación de una lista oficial de 84 personas que, dicen las autoridades, murieron o "desaparecieron" tras la matanza. La lista menciona al menos 14 personas que, según fuentes independientes, fueron detenidas u hospitalizadas, lo que hace pensar que al menos 14 personas pueden haber sido asesinadas bajo custodia —aunque el número real podría ser más elevado.

La investigación oficial de la matanza de Santa Cruz se caracterizó por graves deficiencias. Culminó con el enjuiciamiento de dos soldados y ocho agentes de la policía, que recibieron penas de ocho a 18 meses de cárcel. Los oficiales al mando de las tropas en Santa Cruz no fueron llevados ante la justicia. Por contraste, algunos de los manifestantes pacíficos detenidos durante y después de la matanza fueron condenados a cadena perpetua por subversión.

Pero la resistencia pacífica no se ha extinguido, ni ha cesado la violencia implacable con que la combate el Estado. El 14 de julio de este año, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza una manifestación en la Universidad de Timor Oriental. Decenas de estudiantes fueron golpeados brutalmente por efectivos policiales y militares, causando heridas graves. Durante y después de la manifestación se detuvo a 22 personas, posiblemente a muchas más. Alarma la posibilidad de que algunos de los detenidos puedan ser torturados o hayan "desaparecido".

El obispo Belo, líder de la Iglesia Católica en Timor Oriental, hizo un enérgico llamamiento en pro de la autodeterminación de la región: «Es necesario que se dé a la gente la oportunidad de hablar. ¿Estamos contentos con la integración o no estamos contentos? ¿Queremos ser independientes o queremos estar integrados? Es algo que debe elegir libremente el pueblo de Timor Oriental, no los indonesios ni ninguna otra persona».